

LIDIA AGUILAR BALDERAS¹

FRANCISCO SÁNCHEZ ESPINOZA²

El rediseño del sistema electoral mexicano

Resumen

El sistema electoral mexicano contemporáneo ha estado determinado por los resultados de los procesos electorales, con ello se evidencia la necesidad de irlo ajustarlo a las componendas políticas, pero también es derivado de las anomias que se presentan en cada elección. Así la necesidad de modificar la estructura electoral es consecuencia directa de las presiones de los diversos actores políticos en cada brega electoral.

Es de interés en este trabajo hacer una revisión puntual de las reformas políticas que van delineando el sistema electoral mexicano a fin de identificar los momentos coyunturales de diversa índole que las hicieron posibles.

ABSTRAC

The contemporary Mexican electoral system has been determined by the results of the electoral process is thus evinces the need to adjust policies Irlo compromise, but it is also derived anomias presented in each election. So the need to amend the electoral structure is a direct consequence of the pressures of the various political actors in each electoral struggle.

It is of interest in this work make a timely review of the political reforms that are outlining the Mexican electoral system to identify junctures of various kinds that made them possible.

INTRODUCCIÓN

¹ Doctora en Sociología, FDYCS de la BUAP, Profesora Investigadora, lidiabalderas@gmail.com

² Doctor en Sociología, FDYCS de la BUAP, Profesor Investigador, frasaes07@hotmail.com

ÍNDICE

1. ESTRUCTURA: CONCEPTOS DEL SISTEMA ELECTORAL

2. REVISIÓN HISTÓRICA DE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO SIGLO XIX Y SIGLO XX

2.1 LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

2.2 CONSTITUCIÓN DE 1824

2.3 LEY CONSTITUCIONAL DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1835 Y LEY DE ELECCIONES DE 1836

3.4 BASES ORGÁNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 1843

2.5 ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS DE 1847

2.6 CONSTITUCIÓN DE 1857

3 REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES SIGLO XX

3.1 LEYES ELECTORALES DE 1901 A 1911 Y EL INICIO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

3.2 LEY ELECTORAL DE 1911

3.3 LEYES Y REFORMAS ELECTORALES 1946-1973. PERIODO DE REAJUSTE EN TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS

4. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

5. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 2014 EN MATERIA ELECTORAL

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

INTRODUCCIÓN:

Seguimos preguntándonos cómo podemos paliar el tremendo desequilibrio social que impera en el país, donde la justicia entendida desde la perspectiva de los clásicos filósofos griegos previamente mencionados que es vista como valor supremo, en la realidad no se encuentra en las instituciones ni en los sectores sociales, nos aferramos entonces a la ilusión de que las reformas en materia político electoral nos lleve a un desarrollo y progreso en todos los aspectos, un gobierno que en suma nos conduzca al bien común, entonces nos enfrascamos en la búsqueda de la mejor opción, aquella que nos presenta una posibilidad que va de la mano con el cambio institucional del gobierno, aterrizando por consecuencia

en la representación política y su implementación a través del ejercicio de la misma, la cual por cierto en nuestro país, aún tiene largo camino por recorrer en aras de lograr su consolidación, pero... ¿qué hay detrás de este mecanismo para generar gobierno?, en los siguientes párrafos intento mostrar algunos de los aspectos que me permiten dilucidar, desde la perspectiva de las ideas, que pasa con la democracia en la actualidad.

La democracia como forma de gobierno ha permeado lo más profundo de las organizaciones estatales de occidente, y cada vez se encarama más en otras civilizaciones como las de oriente. Cabe cuestionarnos, como es posible que una forma de gobierno que fue duramente criticada cuando se creó,³ con poco tiempo de permanencia, y desdeñada para su aplicación a las sociedades, durante prácticamente 2000 años, ahora, a pesar de sus deficiencias, se posiciona como la mejor opción para generar el poder político.

A modo de dibujar el impacto que la democracia tiene en el sistema mundo ofrezco la presente opinión de un politólogo europeo:

“El concepto de democracia es invocado por todo tipo de ideologías y exaltado extraordinariamente como algo deseable para cualquier sociedad: todos los políticos de distintos signos y partidos, de países con sistemas económicos antagónicos como capitalistas o socialistas, incluso países confesionales como los pueblos árabes hablan de democracia y de derechos humanos, están de acuerdo en que la democracia es un sistema deseable⁴”.

Los estudiosos sociales, han dedicado al tema de la democracia importante cantidad de tiempo, energía, ideas, discusiones; a la par de la sangre derramada por la consecución de sus promesas, que en mucho, a pesar de los costos para la sociedad, aun tiene una enorme deuda con sus seguidores, pues la mayoría de sus postulados aparecen inconclusos, en la visión de sus críticos, sus proselitistas apologistas, los utópicos, e incluso sus detractores, pues se la menciona en todas partes, por distintas clases de personas, de pensadores, y aún no se encuentra la forma perfecta de

³ Macperson apunta que “desde platón y Aristóteles hasta el siglo XVII y XIX, la democracia se definía, si es que se pensaba en ella, como el gobierno de los pobres, los ignorantes y los incompetentes, a expensas de las clases ociosas, civilizadas y ricas (...) la dominación de la clase equivocada” (Macperson, 1997, p. 21).

⁴ Jean-Philippe Peemans. « Planeación territorial para la democracia social y económica » en *Horizonte Sindical. Estudios laborales y sindicales*. Instituto de Estudios Sídicales de América, enero-marzo 1995, num. 4 y 5, p. 24.

aplicarla o por el contrario, quizá el valor de darle carpetazo. Para enfocar las energías en formas alternativas de gobierno.⁵

1. ESTRUCTURA: CONCEPTOS DEL SISTEMA ELECTORAL

En general, hablar de los sistemas electorales es hacer referencia a los procesos, mecanismos, instrumentos, técnicas, actores políticos, sociales y económicos que en un juego mayor de reglas en el marco de un supra sistema permiten que se pueda generar el cambio y recambio de los órganos de poder público, así, más que pensar en los sistemas electorales consustanciales a la democracia como elemento indisoluble de la forma de gobierno, será necesario pensar en los mismos como los esquemas bajo los cuales la representación política se hace posible, a través de un entramado jurídico institucional que puede ir desde la perspectiva de meras elecciones de aparador, reproductoras de un esquema autoritario incluso totalitario, hasta de aquellos escenarios en los que la democracia como valor fundamental del liberalismo occidental se ha estado extendiendo cada vez más entre los países del sistema mundo. No obstante esta primera aproximación de lo que identificamos como sistemas electorales, conviene hacer la referencia teórica obligada en donde se conceptualiza este término, así, Norberto Bobbio y Nicola Matteucci y Gianfranco Paquino identifican al sistema electoral en razón de que:

“toda consideración de la funcionalidad de los distintos sistemas debe ser desarrollada en clave comparativa y en referencia a las circunstancias de hecho, con relación a las cuales se encuentran y operan – La acción de los s. electorales debe ser en cambio examinada de manera dinámica, partiendo del supuesto de que no son sino una parte del más amplio sistema político, en el ámbito de cual interactúan con otras variables no menos importantes, como son por ejemplo las instituciones constitucionales, los partidos políticos y la cultura política en general...” (Bobbio y Matteucci, *et. Al*, 2008: 1482).

Ahora bien, si identificamos como dice Nohlen, que tanto en el lenguaje político como en el científico suelen emplearse como sinónimos los conceptos sistema electoral, derecho

⁵ Actualmente, la crítica sigue en la misma tónica, la democracia, en mucho es un sistema de simulación, la ciudadanía tiene distintos grados de desarrollo, desde luego, según la sociedad del Estado de que se trate, pero en definitiva, la ciudadanía sigue mostrándose como una quimera, aunque todo el pensamiento liberal se ha encargado de enarbolar en todas partes, pues su rentabilidad es alta.

electoral, régimen electoral e incluso, ley electoral. Si bien estos conceptos presentan, en general, dos tipos de sentidos: un sentido amplio que abarca las leyes normativas jurídico-positivas, así como las de carácter consuetudinario que regulan la elección de representantes o de personas para cargos públicos; además se considera el sentido estricto, representado por ejemplo, en el sufragio o el modo de convertir votos en escaños a través de una diversidad de formulas de representación⁶. Es necesario distinguir las siguientes relaciones entre esos conceptos y sentidos: es decir, el sistema electoral se refiere al principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la elección, y al procedimiento mismo, por medio del cual los electores expresan su voluntad política en votos que a su vez se convierten en espacios dentro del ejercicio de dicho poder público.

en el tenor del párrafo previo, Rodrigo Borja, en su *Enciclopedia de la política*, plantea que:

Es el mecanismo para convertir votos en escaños como culminación de un proceso eleccionario. En todo acto electoral se plantea el problema de traducir las voluntades políticas de los electores, plasmadas en los votos que han depositado en las urnas, en la asignación de los cargos de la naturaleza representativas que están en disputa. Esta operación es indispensable en los regímenes democráticos cuyos gobernantes se designan por medio de la expresión volitiva de los ciudadanos electoralmente expresados. Los votos deben ser recogidos deben contabilizarse y después convertirse en escaños. Los procedimientos para realizar esta conversión se llaman “sistemas electorales” y suelen ser de muy variada naturaleza – reducidos a dos fundamentales: el mayoritario y el proporcional... (Borja, 2003, p. 1280).

Pero también, en su versión restringida el sistema electoral determina las reglas a través de las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas y con las que es posible convertir votos en escaños. En cambio, la definición amplia consiste en estructuras complejas compuestas de diferentes elementos técnicos que pueden agruparse en 4 áreas:

⁶ A decir del Diccionario de Ciencia Política de Bobbio y Matteucci: Dos son los modelos tradicionales de s. electorales: el mayoritario y el proporcional – todos los sistemas se apoyan en ellos, no dejan de ser intuitivas las consideraciones que se hacen respecto de las exigencias que deben ser satisfechas: la estabilidad del gobierno, y en general del sistema político, y la representación de todos los grupos de intereses en que la sociedad está vinculada... (Bobbio y Matteucci, *et. Al.*, 2008: 1477).

distribución de circunscripciones electorales, forma de candidatura, la votación y la transformación de votos en escaños. (Nohlen, 2008, pp. 7-9).

Se trata pues de procedimientos de formación de órganos de representación política en las elecciones que regulan la manera de cómo el elector puede expresar su preferencia política en votos y cómo este voto se convierte en decisiones sobre la ocupación (personal) de cargos/escaños y la composición (partidista) de asambleas representativas. O como dice el ya mencionado diccionario de Ciencia Política de Bobbio, Matteucci y Pasquino:

“La complejidad de los procesos de formación de las decisiones políticas requiere la mayor simplificación posible, compatible con el derecho, habida cuenta de que cada vez más se reconoce a todos los individuos que forman parte de una organización política la posibilidad de influir de alguna manera sobre los procesos mismos – el mecanismo más conveniente – consiste en la participación popular a través de elecciones, las cuales permiten – en general la elección de personas a las cuales confiar los resortes del gobierno, como así también la expresión del consenso y de la dimensión, la representación de los intereses, el control sobre la actividad de gobierno, la movilización de las masas – para poder hablar de representatividad de las elecciones es necesario que éstas presenten los caracteres de la libertad y de la periodicidad, sin las cuales se reducen el sentido de responsabilidad política que vinculan los gobernantes a los gobernados...” (Bobbio, Matteucci, *et. Al*, 2008, p. 1477).

2. REVISIÓN HISTÓRICA DE LA CREACIÓN Y TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO SIGLO XIX Y SIGLO XX

2.1 LOS SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN

En aquel texto ideado en 1813, se establecía en el artículo 5° que la soberanía recaía en *el* pueblo, quien lo depositaba en el Supremo Congreso Nacional Americano que estaba compuesto por vocales que se renovarían cada cuatro años. Los requisitos para votar se reducían a haber nacido dentro de las Américas o profesar la religión católica, tener más de 18 años y estar casado o haberse sumado a la causa independentista, tener un modo honesto de vivir y no haber sido acusado por ningún delito de fraude. Para ser nombrado como elector se agregaba a la lista anterior ser mayor de 25 años.

Este documento profundamente influenciado por la en su momento reciente constitución de Cadiz de 1812, estableció un porcedimiento de elección indirecto a tres

grados: de parroquia, de partido y de provincia. Cada uno de los habitantes con derecho a votar se reunía en su feligresía correspondiente para nombrar a través de un voto cantado (y antes de haber nombrado a los funcionarios de casilla de entre los presentes) a los que serían sus electores de parroquia, todo precedido por una misa solemne.

Posteriormente estos electores de parroquia se reunían en el partido que les correspondiese para nombrar a través de un mecanismo similar a los electores de partido. Más tarde estos electores de partido procedían del mismo modo para nombrar a los que serían los diputados para el Congreso.

2.2 CONSTITUCIÓN DE 1824

El Poder Legislativo se depositaba en dos cámaras: diputados y senadores. Para poder ser elegido como diputado era necesario: tener 25 años, cumplir con dos años residiendo en el estado o territorio que fuese a representar, los no nacidos en territorio mexicano necesitaban acreditar que tenían una renta mayor a 8 mil pesos anuales. Para ser senador se debían cumplir las exigencias iguales a las necesarias para ser diputado, salvo la edad, pues se requería ser mayor de 30 años para el día de la elección.

En el caso específico para Presidente era necesario: tener 35 años cumplidos, ser mexicano de nacimiento y residir en la república al menos por dos años. Estaba prohibida la reelección. A su vez, para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia era necesario: estar instruido en la ciencia del derecho, ser ciudadano natural de la república y tener 35 años cumplidos para el día de la elección.

2.3 LEY CONSTITUCIONAL DEL 15 DE DICIEMBRE DE 1835 Y LEY DE ELECCIONES DE 1836

la constitución de 1824 era profundamente restrictiva para que se le hicieran modificaciones, así se estableció la forma pétrea por temporalidad y por materia para ser modificada, en el primer caso (temporalidad), era tajante que esta no se podía reformar hasta después del año de 1830 (art. 166), pero además establecía un procedimiento harto complejo de reforma que involucraba a tres legislaturas consecutivas, con ello deberían transcurrir irremediabilmente 6 años (arts. 168-169), en los tiempos consecuentes del inicio de cada legislatura en dónde la tercera legislatura podría empezar el proceso de discusión y finalmente aprobación de las reformas ya tratadas con anterioridad a dos legislaturas previas, así llegamos a la

publicación de las denominadas 7 Leyes de 1836. Pero también, como se ha dicho en el inicio de este párrafo también se guardaron ciertos principios que se consideraron por el constituyente como inmodificables, es el caso de la forma de gobierno y la libertad de imprenta, los cuáles corresponden a la realidad de la constitución por materia (art. 171 constituye el segundo caso de auto protección de la constitución). No obstante, una vez llegado el término de la restricción de tiempo, de seis años, más otros seis del proceso inter legislativo de reforma tremendamente complejo, llegamos al análisis de instrumentación electoral para el recambio del poder público de este documento que sienta un Estado centralista.

Así en la constitución de 1836, para ser ciudadano (art. 7) era necesario que se cumplieran con los requisitos de la nacionalidad, pero también que comprobaran una renta anual de 100 pesos de capital fijo o mobiliatorio, industria o trabajo propio; ser honesto y útil para la sociedad; tener 18 años soltero y 21 si estaba casado. También incluía como derecho ciudadano el votar y ser votados a cargos de elección popular (art.8). Se consideraba además como una obligación de los ciudadanos (art. 9) el concurrir a las elecciones populares, habida cuenta de no caer en las restricciones marcadas para ese ejercicio.

Además agregaba la figura de un cuarto poder constitucional (Segunda Ley arts. 1-8) llamado Supremo Poder Conservador, que recaería en cinco individuos cuyos requisitos de elegibilidad eran: ser mexicano y estar en ejercicio de sus derechos, tener 40 años cumplidos y capital fijo que produzca al menos 3,000 pesos de renta anual, haber sido presidente o vicepresidente de la República, diputado, senador, secretario de despacho o ministro de la SCJN (art. 10 frac. III).

En la Tercera ley de 1836 se establecía el procedimiento para elegir diputados, se marcaba que se elegiría un diputado por cada 150 mil habitantes (art. 2), la renovación se hacía por mitad cada dos años, la calificación de dichas elecciones se realizaba por la cámara de senadores (art. 5). Pero además se creó una ley electoral que establecía el procedimiento de elección de los diputados, en el siguiente tenor:

- 1) Elecciones primarias. A cada ciudadano con derecho a voto se le entregaba una boleta correspondiente. Se iniciaban las votaciones a las 9 de la mañana y el voto

era cantado. Los funcionarios eran elegidos de entre los ciudadanos que acudiesen a votar. De estas elecciones eran designados los compromisarios.

- 2) Elecciones secundarias. Los compromisarios se reunían el jueves siguiente y de entre ellos se elegían a los funcionarios de casilla. Cabe mencionar que el voto era secreto y de éstos se elegía a un elector de partido.
- 3) Elecciones de diputados. Los electores de partido se reunían y de entre ellos se elegían a los funcionarios de casilla. El voto era secreto y a través de un procedimiento igual a los mencionados se elegían a los diputados.

Para ser diputado era necesario: ser mexicano de nacimiento; estar en ejercicio de sus derechos; tener 30 años y un capital fijo o mobiliario de 1, 500 pesos.

En el caso de la cámara de senadores, la tercera ley constitucional establecía un total de 24 (art. 8), estos eran elegidos primeramente por los diputados, ministros de la SCJN, y presidente de la república que proponía cada grupo 24 nombres, que eran remitidos a las juntas departamentales quienes a su vez decidían de estas tres listas a los senadores y enviaban los resultados al Supremo Poder Conservador, quien calificaba las elecciones. Se renovaría por tres partes cada dos años (art. 9). Además deberían de comprobar un capital fijo de al menos 2,500 pesos anuales y una edad mínima de 35 años (art. 12 frac. III y IV).

En la cuarta ley se trató el tema del poder ejecutivo, así el presidente de la república era elegido de la siguiente forma: la cámara de senadores y la SCJN elegían una terna cada uno y la enviaban a la cámara de diputados que a su vez instituía una terna de ambas para remitirla a las juntas departamentales que a su vez designaban al presidente a partir de aquella y regresaban los resultados a la cámara de diputados quienes calificaban la elección. Para ser presidente era necesario tener 40 años cumplidos, demostrar 4,000 pesos al menos de renta anual y ser mexicano de nacimiento (arts. 2 y 14 fracs. I-III).

2.4 BASES ORGÁNICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE 1843

Establecen que para ser ciudadano era necesario: tener 18 años casado o 21 soltero, ser mexicano y tener una renta anual de 200 pesos (art. 18). La cámara de senadores pasaría de

tener 24 miembros a 72, elegidos dos tercios por las asambleas departamentales, el otro tercio por la cámara de diputados, SCJ y presidente de la república (arts. 31 y 32). Para la elección de diputados, se elgirá uno por cada 70 mil habitantes o fracción que pasara de 35 mil (art. 27), demostrar 30 años cumplidos al día de la elección y tener una renta anual mínima de mil doscientos pesos (art. 28 frac. III y IV) se renovarán por mitad cada dos años (art. 30).

2.5 ACTA CONSTITUTIVA Y DE REFORMAS DE 1847

Se establece que por cada que 50 mil almas o fracción que pase de 25 mil se elegirá un diputado, marca una edad mínima de 25 años para este cargo (art. 7), determinaba un número de senadores igual al de cada estado a propuesta del mismo senado y de la SCJ y de la cámara de diputados, votando por diputaciones. Quienes reunieran estos tres sufragios serán electos, y los diputados votando por personas, nombrarían los que faltaran de entre los otros postulados, la mitad de estos senadores pertenecería también al consejo (art. 8), el senado se renovara por tercios cada dos años (art. 9), 30 años cumplidos para ser senador (art. 10). En general se estableció que la elección de senadores, diputados, presidente de la república y ministros de la SCJ se podrían realizar en elección directa, habida cuenta de que en las elecciones del tipo indirectas no podrá ser nombrado elector primario ni secundario el ciudadano que jerza algun cargo público ni eclesiástico (art. 18).

2.6 CONSTITUCIÓN DE 1857

Muchas de las restricciones al voto existentes en las constituciones pasadas se eliminan para ésta. Así para ser ciudadano mexicano sólo era necesario tener 18 años si estaba casado o 21 en caso de ser soltero y tener un modo honesto de vivir. El poder legislativo se depositaba en una sola cámara renovado en su totalidad cada dos años (art. 52), su elección se haría de forma indirecta a un solo grado (art. 55). Se nombraba a un representante por cada 40 mil habitantes o una fracción de más de 20 mil (art. 53). Se requería para el cargo: tener 25 años cumplidos, ser vecino del Estado o territorio y no pertenecer al Estado eclesiástico (art. 56).

El poder ejecutivo se depositaba en el Presidente de la República quien se elegía a un solo grado y a escrutinio secreto (art. 76), tener 35 años al día de la elección y no

pertenecer al Estado eclesiástico y residir en el país al tiempo de la elección (art. 77), durará en su encargo 4 años (art. 78). La SCJ se componía de 11 ministros quienes también eran electos a un solo grado (art. 92). Para lo que se necesitaba estar instruido en la ciencia del derecho, tener más de 35 años y ser mexicano de nacimiento. Para 1874 se agregaría nuevamente la cámara de senadores, cuya elección también sería indirecta a un solo grado. Cada territorio y Estado era dividido en distritos de 40 mil habitantes (obligación del gobernador en turno de hacer la demarcación) y los ayuntamientos tenían la función del empadronamiento.

3 REFORMAS POLÍTICO-ELECTORALES SIGLO XX

3.1 LEYES ELECTORALES DE 1901 A 1911 Y EL INICIO DE LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

En la Ley Electoral de 18 de diciembre de 1901, que consta de ocho capítulos, no se hace mención alguna a los partidos políticos, éstos fueron surgiendo de *facto*. Así, para 1891 se formó la Junta Central Porfirista, después Comité Central Porfirista y finalmente Unión Liberal, que puede considerarse como un partido político incipiente que apoyaba las reelecciones indefinidas del general Díaz; este grupo, encabezado primero por Manuel Romero Rubio y luego por José Ives Limantour, el primero, suegro del presidente de la República y el segundo, secretario de Hacienda, se integraba con porfiristas distinguidos, ubicados en la cúspide del poder político, económico y social (García, 1987: 204-207). El pueblo los denominó “Los científicos”.

A partir de este momento, en México entramos en una fase de construcción institucional electoral que se caracterizará por una constante modificación de las reglas electorales, en dónde la ciudadanía será en buena medida simple espectadora de los juegos de poder político y de control estructural, legal e instrumental. La ley electoral que data del 18 de diciembre de 1901 representó el inicio del colapso electoral del presidente Porfirio Díaz, quién en un intento de disuadir los movimientos en su contra producto de tantas reelecciones para mantenerse en la presidencia, realizó una reforma el 24 de mayo de 1904

en la que se añadió de nueva cuenta, la figura del vicepresidente⁷, se marcaba además que las elecciones serían ordinarias celebradas cada dos años para renovar al poder legislativo y de 6 años para el cambio de poder en el ejecutivo (presidente y vicepresidente).

A la par de esta reforma, aparecieron muchos clubes políticos, es el caso del encabezado por Camilo Arriaga en San Luis Potosí; el de los hermanos Enrique, Jesús y Ricardo Flores Magón, quienes junto con otros personajes fundaron el Partido Liberal Mexicano (PLM), publicaron un periódico llamado *Regeneración* y lanzaron, desde San Luis Missouri, un Manifiesto a la Nación, que contenía diversos puntos reivindicatorios, entre ellos el lema “Municipio Libre”. Es el caso también del Partido Democrático, conformado por varios clubes en diferentes partes del país

Un factor que detonó el surgimiento de un mayor número de grupos de oposición, en forma de partidos políticos iniciales, fue lo asentado por el presidente Díaz en la entrevista concedida en el Castillo de Chapultepec al reportero estadounidense James Creelman (1908, 242), el 3 de marzo de 1908, para la *Pearsons Magazine*, en donde manifestó, entre otras cosas, que consideraba que el pueblo ya estaba preparado para seleccionar y cambiar a sus gobernantes en cada elección sin el peligro de revoluciones armadas y sin estorbar el progreso del país.

Madero impulsó la formación del llamado Centro Democrático Antirreleccionista, el que a su vez conformó varios clubes políticos en diferentes partes del país, por lo cual llevó a

⁷ Una vez aprobada la iniciativa, Porfirio Díaz señalaba ante los diputados y senadores, en su estilo parco y autoritario, la poca importancia que le prestó a la creación de la misma. Con desdén les dijo: “Es satisfactoria la nueva prueba de cordura dada por el país en la práctica de nuestro sistema político...” En el poder legislativo las reacciones fueron igual de tibias: “Las adiciones y reformas últimas hechas aa la Constitución General, que han determinado la creación del cargo de Vicepresidente de la República, han traído consigo la necesidad de reformar la ley electoral en lo que se refiere a la elección de ese alto funcionario; al modo de computar los votos emitidos para designar a la persona que deba desempeñar el nuevo cargo, y para hacer la declaración respectiva (Cámara de Senadores 2004, sesiones del 21 y 23 de mayo de 1904).

cabo en 1909 algunas giras políticas que sirvieron para difundir sus ideas y proyectar su figura. En 1909 surgieron otros grupos contrarios a Díaz, entre otros, el Partido Nacional Democrático y el Club Soberanía Popular; en el primero militaban figuras como Benito Juárez Maza, Abraham Castellanos y Francisco Baca Calderón. Ante la evidencia de que el presidente Díaz sí presentaría su candidatura para el periodo presidencial 1910-1916, salvo el Partido Liberal Mexicano de los hermanos Flores Magón, los otros se decidieron no competir por la vicepresidencia de la República, aceptando de hecho una nueva reelección presidencial, sin más que sólo observar la consumación de un hecho al que ya estaban más que acostumbrados.

3.2 LEY ELECTORAL DE 1911

con esta ley, la división distrital se hará por los gobernadores de los estados o autoridad política del lugar, identifica un padron electoral

Con esta ley, los partidos políticos ya consignaban un color distintivo. Para constituir un partido político se requería una asamblea constitutiva de un mínimo de 100 miembros, la cual tenía la función de dirigir los trabajos del partido y que haya aprobado el programa político y de gobierno, que haya al menos una periódico de propaganda, que el partido en cuestión presente al menos una candidatura. Las candidaturas debían ser registradas por lo menos un mes antes del día de la elección. Las elecciones eran indirectas en primer grado. Por cada 500 habitantes se elegía un elector para formar los Colegios Sufragáneos. Entre los requisitos para ser candidato estaban: ser ciudadano empadronado, saber leer y escribir, no tener mando militar, funciones judiciales, ni ser ministro de algún culto.

Presenta además un interesante sistema de nulidades, en primera instancia se reconoció en el artículo 111 que todo ciudadano mexicano tiene derecho a reclamar la nulidad de las elecciones, identificaba como causas para este efecto hacer uso de violencia sobre los colegios municipales, que se presentara cohecho, soborno, errores de nombre o identidad sobre la persona elegida, que el nombramiento del dichos colegios electorales se haya hecho infringiendo la ley y el no haber permitido a los partidos políticos ejercer su representación en los colegios municipales electorales.

En el caso de el procedimiento electoral, se elegían en dos momentos, primero se hará la

elección de diputados a mayoría absoluta de votos y luego serán los diputados los que calificarán la elección, de senadores, presidente, vicepresidente y ministros de la Suprema Corte de Justicia, así correspondía a los diputados el computo de los votos, corroborar la legalidad de la elección, encontrando además en caso de empate el ya usado esquema de la “suerte” como definitoria en la elección (arts. 72-110).

3.3 LEYES Y REFORMAS ELECTORALES 1946-1973. PERIODO DE REAJUSTE EN TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS

La ley electoral de 1946 promulgada por Manuel Ávila Camacho el 31 de diciembre de 1945 y publicada el 7 de enero de 1946, surgió como reglamentaria de los artículos 36, fracción I, parte final, 60, 74, fracción I, y 97, en su parte conducente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se exigía que los estatutos de los partidos incluyeran un sistema de elección interna para nominar candidatos, un programa y un método de educación política de sus asociados y un sistema de sanciones para aquellos de sus componentes que violaran los principios morales o políticos del partido. Resaltaba, de igual forma, el que los candidatos no pudieran inscribir su propia candidatura, ya que ésta debía ser hecha a través del partido político postulante, toda vez que en otro artículo se reconoció la existencia de candidatos independientes. Algo importante también es que reguló la denegación del registro de una candidatura y el recurso en contra de dicho acto. Se establecía que solamente podían participar los partidos que con un año de anticipación a la celebración de las elecciones.

No obstante la rigurosidad con la regulaba a los partidos políticos, la ley de 1946 tenía un artículo transitorio que permitía una forma especial de registro a los partidos que ya existían y habían desarrollado actividades políticas comprobables antes de su vigencia, demostrando que tuvieran diez mil miembros, trescientos en cada uno de la mayoría de las entidades de la República. Los tres partidos que existían en el momento: PRI, PAN y PCM, se acogieron a ese transitorio. Obtuvieron su registro 11 partidos políticos, restricción a su creación con esta ley, solo con 10 mil ciudadanos se podía acceder al registro en vez de los 30 mil originales que contemplaba esta ley.

Se exigía igualmente que cada asamblea nombrara a representantes que deberían participar en una reunión general donde un notario certificara la constitución del partido político en

cuestión, una vez establecido, este partido debía registrarse ante la Secretaría de Gobernación, que otorgaba Certificado de Registro, necesario para ostentarse como partido político nacional y ejercer los derechos que concedía la ley en la materia, estos registros se publicaban en el Diario Oficial y luego se daban a conocer a la Comisión Federal de Vigilancia Electoral CFVE⁸ y las Comisiones locales Electorales (deberían comprobar la identidad y domicilio de no menos del 5% de los afiliados por medio de testigos. Además de verificar que los afiliados conocían los documentos básicos del partido y dar fe de su ocupación y credencial permanente de elector, es el caso también de que los militantes deberían de habitar en por lo menos la mitad de los municipios o delegaciones en un mínimo de 25 personas en cada una de ellas. A partir de dichas comprobaciones, se contaban 20 días para resolver si procedía o no con el registro del partido político. Para la elección de 1949, se pasó de 11 a 3 partidos, y ello en realidad gracias a la vigencia del artículo primero transitorio que permitió que en 1946 los partidos se apegaran a esta benevolencia 10 mil/300 en tanto que ya en 1949 se exigía 30 mil/1000.

En el caso del Partido Fuerza Popular obtuvo su registro provisional el 13 de mayo de 1946, pero después de algunos inconvenientes en su declaración de principios, la Secretaría de Gobernación mandó revisar de nueva cuenta dichos principios, argumentando en consecuencia que este partido debería de sujetarse en acatar lo que marcaba la constitución general, así que hubo de modificar algunos aspectos de sus idearios y principios, aunque a pesar de los esfuerzos por mantenerse en la legalidad, terminó por perder el registro cuando dos años después de obtener dicho registro “definitivo” al acreditar mas de 46 mil ciudadanos, pues ocurrió que en las elecciones de 1949, en un mitin se encapuchó la estatua del Hemiciclo a Juárez el 19 de diciembre de 1948, adjudicándole el gobierno a este partido este hecho intolerable para el régimen, así que desapareció al menos formalmente del raquíptico sistema de partidos.

En el caso del Partido Comunista, aliado con otras agrupaciones políticas organizaron el Frente Electoral del Pueblo (FEP), su solicitud de registro fue rechazada cuando la secretaria de gobernación pidió a un equipo de investigación que corroborara que la

⁸ Esta comisión estaba integrada por el secretario de gobernación quien fungía como presidente, otro miembro del gabinete, un notario público de más antigüedad en el D.F y dos representantes de los partidos políticos más importantes.

mayoría de los datos que presentaba eran falsos, ello es una muestra de las acciones institucionales faltas de ciertos cuidados y formas de contención, que eran todo, menos cuidadosas.

Por lo que corresponde al Partido Acción Nacional, fundado en 1939, es el partido de oposición de derecha que fue tolerado por el sistema de mejor manera, ello en función de su ideología menos incomoda para el régimen. Aunque también está el caso contrario del Partido Nacionalista de México (de orientación católica) que obtuvo su registro en 1951, simplemente, se declaró su desaparición después de las elecciones en 1964. Partido Comunista (de izquierda radical) en sus estatutos sostenían eran de vanguardia del proletariado y su misión decían, era instaurar un Estado al servicio de esa clase y combatir al imperialismo, consecuentemente fueron expulsados del sistema de partidos y desde luego del electoral. Estaban también en líneas contrarias uno apoyado por el sistema, el Partido Auténtico de la revolución Mexicana (PARM) y otro, profundamente atacado, el Partido Popular Socialista PPS.

En una primera reforma a la constitución (artículo 52) en materia electoral efectuada en el período presidencial de Adolfo López Mateos, con fecha 20 de diciembre de 1960, se estableció que los distritos se conformarían con 200 mil habitantes o bien con fracción que pasara de 100 mil. Posteriormente, para el año 1963 con fecha 22 de junio, fueron modificados los artículos 54 (se reformó el primer párrafo y se adicionaron las fracciones I-V) y 63 de la ley suprema para insertar el esquema de representación proporcional que cambiaría el hasta ese momento sistema único, de mayoría relativa por el denominado sistema mixto, el sistema de Diputados de Partido instaurado en 1963 operaba en la tónica de obtener un mínimo de votación del 2.5 (porcentaje además necesario para obtener el registro como partido político nacional) del total emitido, con ello el partido que lograra este umbral básico tendría 5 diputados, agregando uno más por cada medio punto porcentual adicional que lograra obtener, hasta llegar a un máximo de 20, con la salvedad de que si un partido obtenía la mayoría relativa en por lo menos 20 distritos, no se apegaría a esta disposición, en esta lógica se buscó fundamentalmente consolidar el sistema de

partido hegemónico⁹, requerido para el afianzamiento del sistema corporativo y del propio régimen político, ya que ponía a los partidos de oposición a competir entre sí, cabe decir, que esta fue una desafortunada situación para la oposición política, puesto que se les instauró una especie de bozal a los partidos en los que, sujetándose a ciertas disposiciones y compitiendo entre ellos, era como podían acceder a estas prebendas del sistema al costo de tenerlos bien ubicados y circulando en la lógica reproductora del modelo hegemónico. En lo que se refiere a la modificación en el artículo 63 implicaba efectos vinculantes a los partidos políticos que ganaran elecciones o bien a los que se les asignaran diputados de partido para que se presentaran al congreso a ejercer sus funciones en los tiempos y formas marcados constitucionalmente y en leyes secundarias, ya que de no hacerlo, habría sanciones, este artículo en comento es una respuesta institucional en la que se preveía la rebeldía de los partidos de manifestar su protesta ante elecciones claramente viciadas de origen, en el discurso, sobre todo del PAN.

“Adecuó la legislación electoral a la reforma constitucional en materia de diputados de partido. Se inicia la legislación en materia de prerrogativas de los partidos...El orden de la calificación de la elección de diputados en primer lugar estaban los de mayoría y luego los de partido; y con base en el artículo 54 constitucional, la propia cámara determinaba el número de diputados de partido que tenía derecho cada partido (artículo 127). La presión hacia los partidos siguió, evitando que hicieran uso de la candidatura común que decía “Cuando con el consentimiento de un candidato, su registro sea hecho por dos o más partidos sin mediar confederación o coalición, los votos emitidos a su favor no serán computables para el reconocimiento de diputados de partido” (artículo 127 bis). (García, 2002, p. 275).

Para el año de 1973, tomando como base la compleja situación política y social que vivía el país derivada de la confrontación de los estudiantes universitarios con el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, heredando parte del problema Luis Hecheverría Alavarez, se hizo una nueva ley electoral se recogió incluso las reformas constitucionales, con la mejor forma de organización con relación a las anteriores, dice Raymundo Gracia, “con mayor

⁹ “...pueden convivir muchos partidos, pero sólo uno controla todo el poder y no se pone en riesgo durante los procesos electorales...(Pempel *op. cit.* en Velázquez, 2011. P. 137) En estos partidos, las élites controlan de manera férrea el poder; no facilitan la participación de todos los grupos en las definiciones programáticas o en la elección de los candidatos y las bases militares carecen de mecanismos para premiar o castigar a sus líderes si estos no cumplen con sus promesas electorales, sus programas de gobierno o sus compromisos internos. Estos partidos se caracterizan por tener bajos niveles de democracia interna, a pesar de repetir incansablemente su vocación democrática...” (Velázquez, 2011. P.138).

coherencia...En materia de partidos políticos se reduce la base de militantes para otorgar registro de 75,000 a 65,000 en el ámbito nacional y de 2,500 por entidad a 2,000. Sin embargo, seguían existiendo únicamente cuatro partidos nacionales PAN; PRI; PPS Y PARM". (García, 2002, p. 276).

Reforma política electoral a los artículos de la ley fundamental en los artículos 6º, 41, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 60, 61, 65, 70, 72, 74, 76, 93, 97 y 115 constitucionales. Publicada el 6 de diciembre de 1977, siempre en la lógica de resolver de la mejor manera posible los duros cuestionamientos al sistema político, derivados todos de una acumulación constante de inconformidades, moviemntos sociales reprimidos y control férreo de la oposición política. Así, el bosquejo general de las reformas a la constitución estuvieron en el tenor de implementar el esquema de los 300 distritos uninominales para que independientemente de que la población crezca o decrezca, se mantendra una distiribución de este numero inalterado de distritos. Otro aspecto a reclacar en dicha reforma, es que se reconoció en el artículo 41 a los partidos políticos como entidades de interés publico, por ello se justifica plenamente su derecho a recibir preponderantemnete financiamiento público y con esos recursos a contribuir al fortaleciemnto de la democracia en el país. Se afianza la idea de representación porporcional pero ahora cambiando del esquema de los diputados de partido, al de representación mediante aplicación de formula electoral, previos requisitos de registro, obtención de un mímo del 1.5 % de los votos y que no haya obtenido más de 60 triunfos en los distritos uninominales.

Igualmente se incorporan los mecanismos del *referendum* y la iniativa popular, aunado a ello en el artículo 6, se declara que el derecho a la información pública debe estar garantizado po el Estado. Muy importante el tema de la representación política a nivel municipal, así en lo que respecta al artículo 115, se estableció en el último párrafo de la fracción VII que en cada una de las entidades federativas se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de las legislaturas locales y el principio de representación proporcional en la elección de los ayuntamientos de todos los Municipios, igualmente se introduce el sistema de diputados de minoría como obligatorio en las legislaturas locales; el principio de representación proporcional en la elección de ayuntamientos en los municipios cuya población fuera de 30,000 o más habitantes. A proposito de ello, dice Raymundo García:

Esta reforma estuvo encaminada a resolver pacíficamente las contradicciones de la sociedad a través de instituciones; fue su propósito actualizar el orden jurídico para enmarcar la lucha de los

contrarios, estimular la participación ciudadana, recuperar el gobierno y construir un sistema político con legitimidad. (García, 2002, pp. 277-279).

Ya propiamente en la Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales, del 28 de diciembre de 1977, se potencia el hecho de que los ciudadanos se vinculen tanto a los partidos políticos nacionales como a las organizaciones políticas, estas últimas podían registrarse siempre que garantizaran ser afiliados en todo el país y con 10 delegaciones, a nivel nacional siguen siendo 65 mil, en las entidades se aumenta a 3,000, con una presencia mínima de 50% en los distritos con 300 afiliados como mínimos en cada distrito referido. Existe también el ya mencionado umbral mínimo del 1.5 para mantener el registro definitivo.

Ya para 1990, entramos a otra serie de modificaciones constitucionales con Carlos Salinas de Gortari, se modifican los artículos 5, 35 fracción III, 36 fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción IV, base 3ª. En esta serie de reformas, se asentó por ejemplo en el artículo 35 que los ciudadanos se podían afiliar políticamente bajo la lógica de que esta fuera de forma libre y pacífica, siendo así una parteaguas porque evitaba expresamente la afiliación de tipo obligatoria y/o corporativa. Muy importante igual, retirar los padrones del Registro Nacional de Electores para trasladar a la obligación ciudadana en el artículo 36 frac. I de inscribirse en el Registro Nacional Ciudadano. Desde luego, fundamental lo que se agrega en el artículo 41 en donde se crea una institución que desarrollará los procesos electorales bajo los principios creados de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo, a la par aparece un Tribunal Electoral Autónomo, como órgano garante de los derechos en materia electoral jurisdiccional.

En lo que respecta al artículo 54 se buscó que la elección de los 200 diputados por el principio de representación proporcional y sistema de listas regionales, bajo las reglas siguientes: 1. Un partido para registrar sus listas, debería acreditar que participaba con candidatos de mayoría en por lo menos 200 distritos uninominales. Igualmente se reguló fuertemente el tema de las coaliciones partidistas.

4. ELEMENTOS DE ANÁLISIS DEL SISTEMA ELECTORAL MEXICANO

Una vez que se realizó una remembranza de la trayectoria del sistema electoral mexicano, se hace necesario ir identificando los aspectos que en lo particular constituyen nuestro sistema

electoral, así, partiendo de la idea de que el sistema electoral se compone de una serie de aspectos entre los que se cuentan al sistema de partidos; las instituciones electorales, entre ellas la específica en justicia electoral; la cultura política y su consecuente impacto en el comportamiento electoral e incluso los factores económicos y sociales, cabe entonces ahora dejar espacio para ir bosquejando desde esta compleja red de interacciones, cuáles han sido los campos teórico-metodológicos desde los cuáles se han estado realizando los análisis de nuestro sistema electoral. Para ello queremos detenernos para relanzar una revisión de la reveladora trayectoria que hace Marcela Bravo sobre las influencias y desarrollo de dichos estudios en el voto y las elecciones en nuestro país, ella identifica que la diversidad de enfoques analizados van desde los estudios sociológicos, psicológicos y desde luego los politológicos, todas estas perspectivas que buscan dar explicaciones a las relaciones entre los votos y el comportamiento político de los electores, en el tenor de sus preferencias partidistas y desde luego como estas van dibujando las brechas electorales y viceversa. Así es que a partir de la configuración del régimen hegemónico de la dinámica priísta se van generando una serie de estudios que han cobrado relevancia a la par de la implantación de la competencia competitiva tanto en los ámbitos subnacionales como desde luego en el nacional.

En ese tenor, dice Bravo que estos estudios de referencia voto y elecciones han ocurrido en una serie de enfoques complementarios. Identificando en primer lugar a los de la escuela de Columbia de carácter sociológico, los cuales “buscan la explicación del comportamiento electoral en el entorno social del individuo y en los flujos de información política principalmente en los medios de comunicación y campañas políticas” (Bravo en Reveles, 2012, p. 216). Identifica en esta corriente a los estudios clásicos en México de Almond y Verba sobre la cultura política cívica en la lógica de cómo “los individuos internalizan los valores y actitudes que determinan su comportamiento político”, pero también se encuentra un segundo sentido que se aboca más bien a identificar intersubjetivamente “el entendimiento de significados e identidades compartidas que constituyen la parte simbólica de la vida social”; igualmente diferencia esta autora un segundo enfoque que lleva al denominado “modelo Michigan” en el que se abordan los aspectos de los clivajes políticos, alineamientos y sistemas de partido, como ejemplo cita el trabajo de Campbell en razón de la percepción de los electores sobre la política y los partidos políticos, así creó Bravo que

este autor a su vez encuentra que el nivel de conceptualización de los electores sobre los aspectos políticos es pobre, en tanto que “las respuestas políticas de los ciudadanos y los consecuentes resultados electorales no son producto de una elaboración ideológica por parte de los votantes, sino de su identificación con grupos de pertenencia, definidos por sus características individuales” (Bravo en Reveles, 2012, p. 217). En esta misma línea también se presenta la aportación de Lipset y Rokkan quienes manifiestan que las preferencias políticas de los electores son expresadas en función de las líneas de decisión social, basadas en aspectos como la clase, la religión, las ideologías etc. Así “los electores votan de acuerdo a sus identidades definidas por los clivajes políticos, con un mínimo de información sobre la política” (Bravo en Reveles, 2012, p. 217).

Se considera pues que en realidad los electores votan más por cuestiones de intereses de grupo que por aspectos ideológicos manejados por los partidos políticos. Cabe hacer mención en esta parte que del grueso de la población, independientemente de lo que la ley constitucional y la respectiva en materia electoral que disponen que los partidos políticos serán artífices del fortalecimiento de la democracia en la lógica de dar a conocer su ideología, su programa de acción para generar identidades que contribuyan precisamente la fortalecimiento de dicha democracia, en dónde para tal efecto, reciben una serie de prebendas tanto en especie como en dinero contante y sonante que estaría destinado en general a la difusión de dicha ideología y programas de acción, con ello a través de la ya reproducida hartamente en cada ley electoral desde 1911 en la que se determina la existencia de las publicaciones mensuales de dichos partidos. Pero si atendemos y reflexionamos en el impacto que dichas publicaciones han tenido en el afianzamiento de su ideología en la ciudadanía en general, se verá que en la realidad el impacto de éstas es raquítico en proporción a los recursos destinados para tal efecto, pues difícilmente los ciudadanos conocen y/o identifican el nombre de la revista mensual que tiene cada partido de los más representativos de nuestro sistema partidista.

Un tercer enfoque de análisis que revisa Bravo es el que corresponde a los estudios politológicos en esa relación hartamente referenciada de los votos y las elecciones, en donde hace su aparición la elección racional que a decir de la autora a su vez se sustentan en las aportaciones de David Hume y Adam Smith, en función del intercambio y la prevalencia del interés individual. Con ello, la maximización de los beneficios al menor

costo posible entra como un aspecto privilegiado de análisis en el sistema político mexicano en dónde estudios como los de Douglas North se muestra esta “interacción estratégica entre las instituciones y los individuos” (Bravo en Reveles, 2012, p. 119), así se identifica que las instituciones son principalmente las artífices de propiciar ciertos comportamientos en los electores y desde luego de inhibir otros tantos, con ello, acudimos a uno de los puntos centrales que abonan en forma importante a nuestra reflexión, pues somos partidarios de identificar en el entramado normativo institucional todo un delineado de comportamiento electoral pero que va más allá en la medida en que se van configurando a la par una serie de elementos de largo alcance que interfieren incluso en aspectos como la cultura política, las ideologías e identidades políticas en una complejo pero eficaz hilvanado de formar oposición y/o posturas divergentes pero perfecta y artificialmente disonantes y críticas del sistema, es decir, están tejidos *ad doc* a las necesidades opositoras que el propio sistema político requiere para legitimar el régimen de gobierno, mismo que en definitiva va más allá de un mero plan sexenal de gobierno, sino que se incrusta en todo un modelo de nación en la que se van tanteando las necesidades, los tiempos y las arritmias necesarias para que el sistema en su conjunto siga operando sin mayores cortapisas que las que el propio sistema está dispuesto a propiciar, tolerar y lidiar.

5. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DEL 2014 EN MATERIA ELECTORAL

Como ya se ha hecho mención, en nuestro país, la reforma electoral se convirtió en la vía de acceso para ir allanando el camino de forma lenta, pero consistente en el curso de ir trabajando el proceso de transición a la democracia y de la alternancia política a nivel del ejecutivo federal en el año 2000, su análisis consideramos, resulta indispensable para entender el cambio del poder político, que fue posible gracias a una compleja multiplicidad de factores como el consecuente fortalecimiento del sistema de partidos, en el contexto, se reconocen los derechos políticos, prerrogativas y obligaciones de los ciudadanos, la reforma electoral cumple así, no sólo con propiciar y motivar la participación ciudadana en las elecciones a través de reglas establecidas para elegir a los gobernantes por el método democrático, en elecciones creíbles, haciendo posible la legitimidad y estabilidad del sistema político.

Dicha reforma electoral en México, representó un largo periodo en el que se reconocieron paulatinamente los derechos político-electorales de los ciudadanos, partidos políticos y organizaciones políticas en el marco jurídico de un Estado de Derecho. (Salvador, 2006, pp. 643)

El 10 de Febrero del 2014, se realizó en México la última reforma a la constitución en materia político electoral, la cual pretendió sentar las bases se aspira sean definitivas para el rediseño de nuestro sistema electoral, así, la tarea que concluyó con la expedición de las leyes reglamentarias, fundamentalmente la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ejes articuladores de dicho sistema. (Cámara de diputados. 2014, Gaceta Parlamentaria, Número 3985-V)

Por lo que hace a la reforma al artículo 41, se pueden argumentar varias situaciones, en primera instancia se aumenta el umbral de votación para acceder a la adjudicación de representantes dentro de los órganos legislativos, pasando del 2 al 3% del total de la votación válida para mantener el registro, desde luego que este mecanismo aún esta sujeto al resultado que arroje el proceso electoral venidero en el que los partidos podrán poner a prueba su capacidad para obtener votos por encima de este mínimo, me parece que dados los recursos de diversa índole que reciben, bien valdría exigirles incluso un humbral mayor a este, puesto que ya tenemos partidos consolidados que están muy por encima de esta votación y más bien habría que identificar aquellas fuerzas políticas que deberían de ajustarse a una unión con fuerzas similiares a modo de evitar la dañina atomización que enfrentan como es el ya conocido caso de la izquierda mexicana y que no obstante, se ha mantenido en una votación constante por encima de los 7 puntos porcentuales, en manos del

PRD.

Destaca sin duda la creación del nuevo Organismo Constitucional Autónomo denominado Instituto Nacional Electoral (INE), sustituto del Instituto Federal Electoral (IFE); El INE estará integrado por un consejero presidente y diez consejeros, para un modelo de órgano colegiado idéntico en número a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, la depuración de los candidatos que se inscriban a la convocatoria la realizará un consejo

consultivo integrado por siete personas, tres designadas por el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y dos por el organismo que sustituya al Instituto Federal de Acceso a la Información. De esta integración del órgano consultivo se percibe como un exceso la participación de integrantes designados por la emencionada Comisión y luego el órgano que sustituya al Instituto Federal de Acceso a la Información, pues en nada se relacionan sus funciones con las de carácter político o electoral, máxime que involucrar organismos ajenos a la función electoral no son garantía de la elección de los mejores perfiles para el cargo de consejero; menos aun cuando la elección final quedará de nueva cuenta en manos de la Cámara de Diputados; este aspecto sin duda representa un esquema que no deja de ser más que la reproducción de lo que hasta el momento ha estado funcionando, pues se asume que la cámara de diputados, como los representantes de la nación, serían el órgano más *ad hoc* para tal tarea, infortunadamente, esta medida sólo ha servido para que los grupos parlamentarios y los intereses de ciertas personalidades que cada legislatura se instauran en dicha cámara ha evidenciado una serie importante de vicios a la hora de tomar tales decisiones, pues sigue siendo objeto de discusiones al nivel de las cupulas partidistas y de sólo tres de todos los partidos políticos, obviando desde luego lo que debería de ser un verdadero ejercicio de revisión de los perfiles de quienes llegarían a este importante espacio de toma de decisiones de gran envergadura que empodera a quienes regirán la institucionalidad de buena parte de nuestro sistema electoral mexicano. Así pues, la designación final no puede ser más parcial, pues la realizó el órgano de dirección política de la Cámara de Diputados, es decir, dentro del esquema de la democracia deliberativa a que alude la reforma al artículo 26, no se dió participación al Pleno de la Cámara sino sólo a los representantes de su órgano de dirección política en manos de la Junta de Coordinación Política.

Finalmente, para evitar la postergación en la designación de los consejeros por parte de la Cámara de Diputados, se asigna una nueva facultad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que sea este Alto Tribunal el encargado, mediante insaculación, de designar a los consejeros ante la omisión de quienes deben hacerlo en primera instancia. las facultades cosntitucionales y en leyes secundarias otorgadas al INE vienen a redimensionar a la institución electoral como aquella que puede incluso celebrar los

comicios internos de los partidos, con ello se engrosa en buena medida el de por sí ya exhaustivo trabajo que deberá desarrollar esta institución.

Existe una novedad respecto de cómo se estaba regulando a los partidos políticos, puesto que ahora con esta reforma se crea una ley especial para regular todo lo referente a los mismos, publicada el 23 de mayo de 2014, con 97 artículos, en su título primero llamado Disposiciones Generales, regula lo relativo a la constitución de los partidos políticos en razón de derechos, obligaciones, las formas de participación electoral en relación a las coaliciones, lo conducente a la pérdida de registro y la forma de liquidar sus deudas y bienes una vez que desaparecen, y desde luego el tema de las agrupaciones políticas (art. 1). Se regula también los derechos de los ciudadanos en los caracteres y figuras que reconocen los militantes, afiliados, etc., y desde luego se rechaza la asociación corporativa. En el capítulo II se habla de la distribución de competencia de los partidos políticos, dejando en manos del INE lo relativo al registro, reconocimiento, las prerrogativas de los partidos, la organización de sus procesos internos y desde luego la fiscalización de los recursos otorgados a dichos partidos (art. 7), muy importante lo que se anota en referencia a las posibles facultades de los Organismos Públicos Locales (art. 8 numeral 2) en razón de que:

“El Instituto podrá, excepcionalmente y con la aprobación de una mayoría de cuando menos ocho votos de los integrantes del Consejo General, delegar en los Organismos Públicos Locales la fiscalización de los ingresos y egresos de los partidos políticos locales, sus coaliciones y de los candidatos a cargos de elección popular en las entidades federativas.”

Desde luego, en el entendido de las facultades que ya de por sí van a ejercer los OPLES (art. 9) de reconocer los derechos y el acceso a las prerrogativas de los partidos políticos y los candidatos a cargos de elección popular y verificar incluso que la integración de los congresos locales por ambos principios en donde ningún partido podrá contar en 8 puntos porcentuales de su votación emitida, es decir Esta norma no se aplicará al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje de su votación emitida más el ocho por ciento. Se condiciona además que el participar en la representación proporcional, será ahora con un umbral mínimo de votación del 3%, de igual manera, en sentido inverso de aplicación el excederse en 8 puntos porcentuales, opera el criterio para impedir la subrepresentación en razón de en la integración de la Legislatura, el porcentaje de

representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

El título segundo llamado de los Partidos Políticos establece en el artículo 10 la constitución y registro de los mismos, para que surta los efectos de registro, se debe presentar una declaración de principios y su programa de acción, además de que deberá existir una congruencia entre unos y otros documentos, si se trata de partidos políticos nacionales, deberán contar con al menos 3,000 militantes en por lo menos 20 entidades federativas o bien, tener por lo menos 300 militantes en 200 distritos uninominales, entendiendo y siendo enfática la ley en que bajo ninguna circunstancia el total de afiliados del partido que pretende ser nacional, podrá registrar un numero inferior de afiliados al 0.26% del padron electoral que haya sido utilizado en la elección ordinaria.

Nos resulta también de interés en nuestro análisis el título cuarto de dicha ley, referido al tema del Acceso a la Radio y Televisión, en donde se mantiene que ahora el INE administrará los tiempos del Estado con fines electorales, en coadyuvancia para la regulación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (art. 49).

El financiamiento se sigue manteniendo en los esquemas de público preponderantemente y privado en menor grado. Se crea también el título sexto en su capítulo primero un Sistema de Contabilidad de Partidos Políticos, este constituye sin lugar a duda un esquema que busca controlar y llevar un registro fiel de los recursos económicos asignados y gastados por dichos partidos políticos (art. 60), en razón de:

“Estar conformado por el conjunto de registros, procedimientos, criterios e informes, estructurados sobre la base de principios técnicos comunes destinados a captar, valorar, registrar, clasificar, informar e interpretar, las transacciones, transformaciones y eventos que, derivados de la actividad financiera, modifican la situación patrimonial del partido político; las disposiciones que en materia de fiscalización establezcan las obligaciones, clasifiquen los conceptos de gasto de los partidos políticos, candidatos y todos los sujetos obligados; así como las que fijan las infracciones, son de interpretación estricta de la norma; reconocer la naturaleza jurídica de las operaciones realizadas por los partidos políticos con terceros, en términos de las disposiciones civiles y mercantiles; registrar de manera armónica, delimitada y específica sus operaciones presupuestarias y contables, así como otros flujos económicos; reflejar la aplicación de los principios, normas contables generales y específicas e instrumentos que establezca el Consejo General del Instituto; facilitar el reconocimiento de las operaciones de ingresos, gastos, activos, pasivos y patrimoniales; integrar en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable, a partir de la utilización del gasto devengado; permitir que los registros se efectúen considerando la base acumulativa para la integración de la información presupuestaria y contable; reflejar un registro congruente y ordenado de cada operación que genere derechos y obligaciones derivados de la gestión financiera; generar, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y facilitar el registro y control de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles.”

En un balance general sobre los contenidos y alcances de esta ley general de partidos políticos, consideramos que representa un buen elemento de sistematización de las funciones y regulaciones de los partidos en general, con ello, nos parece el fortalecimiento del sistema de partidos será algo que se verá inmediatamente en el proceso electoral que inión el 7 de octubre pasado, puesto que el aunmeto del porcentaje mínimo de votación que deben obtener los partidos para mantener su registro depurará en aproximadamente un 20% nuestro actual sistema de partidos políticos.

Por otra parte, el tema de la reforma constitucional, que incorporó la palabra “adquirir” a para potenciar la nulidad de una elección no sólo ante la compra, sino cualquier tipo de adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en la ley, controla en forma interesante muchas de las posibilidades usadas en las ultimas elecciones previas en razón de acceso a radio y televisión, más allá de la compra, en dónde entraban sin menor empacho en el esquema de ser obsequiados o donados, ahora llevaría incluso en casos dramáticos a la nulidad de la elección, siempre que la elección registrara entre el primero y segundo lugar una diferencia porcentual de menos del 5% de los votos.

En lo que respecta a la Ley General de Delitos Electorales, se identifica como una facultad concurrente el que tanto la federación como las entidades se coordinen para reconocer y hacer investigaciones en este tipo de delitos. Las sanciones que van desde 200 a 400 días de multa y la prisión de 2 a 9 años a quienes, desde los espacios públicos coaccionen el voto a favor de algún partido político por diversos medios como el condicionamiento de los programas sociales, el obligar a los subordinados a votar en un sentido específico o participen en eventos proselitistas, etc.

CONCLUSIÓN:

La reforma político electoral, sin lugar a duda, en el Estado Mexicano ha estado sujeta a las formas en como el mismo sistema se ha ido delineando en cada proceso electoral, ocurre así una especie de lo que sería circulo vicioso o virtuoso, según la perspectiva de la que se quiera tomar, en la que se modifica la ley electoral y en buena medida la propia constitución como una forma de ir respondiendo a las exigencias y ocurrencias políticas

que se caldean posteriormente a las elecciones, sobre todo aquellas en las que se contiene por la presidencia de la república, en ese tenor, resulta importante que ya no se haga uso de la *reformatitis* como un mecanismo para dirimir los conflictos, sino que más bien sea ya necesario que los partidos, los actores políticos y en general en la cultura política se retire la lógica de que en las reformas electorales se encuentra la fórmula mágica para transitar a la democracia, pues si bien, es de importancia el delineado institucional y legal para la competencia electoral, falta el lograr aterrizar esas reformas a la realidad operativa del quehacer político en donde los actores políticos en general deben ya de tomar con seriedad sus responsabilidades para contribuir al fortalecimiento democrático de nuestro país.

BIBLIOGRAFÍA:

Borja, Rodrigo, (2003). *Enciclopedia de la Política*, (tercera ed.), México.

García, Raymundo, (2002). *Derecho Político Electoral* (Segunda edición, 2002 ed.). (B. U. Puebla, Ed.) Puebla, Puebla, México: Dirección General de Fomento Editorial.

Reveles Vázquez, Francisco (coord.). *La ciencia política en México hoy: ¿qué sabemos?*, UNAM-Plaza y Valdez

Macpherson, C.B, (2008). *La democracia liberal y su época*, 4ª reimpresión, Trad. de Fernando Santos Fontenla, España, Alianza Editorial.

Nohlen, Dieter, (2008). *Sistemas Electorales en su contexto*, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM-BUAP, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México.

Fuentes: De fuerzas Políticas y partidos Políticos, Samuel León y Germán Pérez.
<http://books.google.com.mx/books?id=c1rfp8PT8ikC&pg=PA170&lpg=PA170&dq=partidos+pol%C3%ADticos+1946&source=bl&ots=6TmrXPgaFr&sig=xbXa6xok3iLKlIRUX17mLd25OK0&hl=es-419&sa=X&ei=uggqVNKsKYWjyATP8YC4AQ&ved=0CEYQ6AEwCQ#v=onepage&q=partidos%20pol%C3%ADticos%201946&f=false>

http://sil.gobernacion.gob.mx/Librerias/pp_ReporteSeguimiento.php?SID=&Seguimiento=3051277&Asunto=3050393

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_184_esp.pdf

Véase: Parametría. Confianza en las Instituciones. <http://www.parametria.com.mx/DetalleEstudio.php?E=4480> y Consulta Mitofsky. Confianza en las Instituciones. <http://consulta.mx/web/index.php/estudios-e-investigaciones/mexico-opina/198-mexico-confianza-en-las-instituciones>

Martínez Villegas Austreberto, 2011. Comunicación de resultados de investigación la Unión Nacional Sinarquista: transformaciones ideológicas y participación política en el México posrevolucionario (1949-1971), <http://148.206.53.84/tesiuami/UAMI15393.pdf>, consultado el 11 de octubre de 2014.